



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ejecutivo conexo
DEMANDANTE	Flor Lucia Saldarriaga López
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 15º Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 015 2020 00205 02
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	Auto interlocutorio Nro. 22 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Embargo de cuenta para el pago de sentencias en ejecución por mesadas pensionales
DECISIÓN	Revoca decisión

Medellín, veintisiete de mayo de dos mil veitiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los Magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado de la ejecutante contra el auto interlocutorio proferido el 10 de febrero de 2021, por el Juzgado Quince Laboral del Circuito dentro del proceso promovido por **Flor Lucia Saldarriaga López** en contra de **Colpensiones**, código de radicado único nacional número 05001 3105 **015 2020 00205** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que en proveido 10 de febrero del año en curso, el juzgado de conocimiento libró orden de apremio contra la accionada por la suma de \$26.388.318.00 **por concepto de mesadas pensionales adeudadas entre el 01 de febrero al 30 de noviembre**

de 2019, incluyendo la adicional, negando la medida cautelar tendiente al embargo de los dineros depositados por la ejecutada en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 65283208570, al estar cobijados con el beneficio de inembargabilidad, en los términos del artículo 134 de la Ley 100 de 1993, lo que además se ratifica con los informes rendidos al juzgado por el fondo de pensiones.

Recursos de reposición y apelación

Inconforme con la decisión el apoderado judicial de la ejecutante sustenta su recurso indicando que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y especializada, es totalmente procedente el embargo solicitado, por cuanto lo pretendido es atender una obligación atinente **al pago del retroactivo pensional** adeudado a favor de su representada, por **las mesadas pensionales** causadas entre el 1 de febrero al 30 de noviembre de 2019, por cuanto a la fecha estas no han sido canceladas, vulnerándose los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social de su representada.

La juez de conocimiento no repuso su decisión argumentando que de las distintas certificaciones de las entidades competentes, *"Los recursos parafiscales administrados por Colpensiones en todas las cuentas de Ahorros y Corrientes abiertas en las entidades bancarias, provienen del Sistema General de Pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y por lo tanto, son de naturaleza Inembargable conforme el artículo 48 y 63 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo establecido en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo del artículo 37 de la ley de presupuesto 1873 del 20 de diciembre de 2017, la Circular No. 22 del 08 de abril de 2010 de la Procuraduría General de la Nación y la Circular 20121E42061 del 13 de Julio de 2012 emanada por la Contraloría General de la República..."*

Agregó además que la naturaleza de inembargabilidad de los recursos fue

reiterada en el artículo 594 del CGP, y que esta Corporación igualmente en varias de sus Salas ha ratificado la imposibilidad de tales embargos, citando apartes de las providencias del 8 de octubre de 2019, emitida dentro del proceso ejecutivo con radicado 2015-01140-00, y del 15 de diciembre de 2020, proferida dentro del proceso con radicado 015-2009-00439-00 por la magistrada Carmen Helena Castaño Cardona, para concluir que como en el presente asunto no se deprecaba el pago de mesadas pensionales sino la cancelación de otras obligaciones de índole patrimonial no era viable ordenar la medida cautelar solicitada.

En los términos del párrafo 1º del artículo 42 del C. P. T. y de la S.S., se procede a dictar la decisión, previas las siguientes,

Consideraciones:

El problema jurídico en este asunto tiene que ver con la posibilidad de decretar el embargo de recursos que COLPENSIONES posee en la cuenta de ahorros Bancolombia N° **65283208570**, con el fin de obtener el pago de de \$26.388.318 por **concepto de mesadas pensionales** adeudadas, causadas entre el 01 de febrero al 30 de noviembre de 2019, incluyendo una adicional.

Pues bien, frente al tema se tiene que el artículo 48 de la Constitución Política claramente dispone que los recursos de la seguridad social no se destinaran a fines diferentes, orientación reiterada en el literal *m)* del artículo 13 de la Ley 100 de 1993:

Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran

Y sobre la inembargabilidad el artículo 63 de la Carta Superior establece:

Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables". (Resaltado fuera de texto).

Y para el caso en concreto, el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 en forma expresa contempló la inembargabilidad de los recursos administrados por el Seguro Social, así:

Son inembargables:

2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas.

Sobre el principio de inembargabilidad de los recursos públicos se ha pronunciado la Corte Constitucional en diversas oportunidades, en sentencia C – 1154 del 23 de noviembre de 2008, explicó que el mismo tiene su sustento en la adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado. En esta providencia se aludió a la línea jurisprudencial sobre el tema, integrada básicamente por las Sentencias C-546 de 1992, C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-555 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, T-1105 de 2004 y C-192 de 2005. Desde el primer pronunciamiento que estudió el asunto en vigencia de la Constitución de 1991, la Corporación ha advertido sobre el riesgo de parálisis del Estado ante un abierto e indiscriminado embargo de recursos públicos:

“Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana.

En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el cien por ciento de su capacidad económica para lograr sus fines esenciales.

La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y extranjeros, expondría el funcionamiento mismo del Estado a una parálisis total, so pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor particular y quirografario.

Tal hipótesis es inaceptable a la luz de la Constitución de 1991, pues sería tanto como hacer prevalecer el interés particular sobre el interés general, con desconocimiento del artículo primero y del preámbulo de la Carta¹.

La postura descrita, que se ha mantenido inalterada en la jurisprudencia constitucional², implica reconocer que el Legislador tiene la facultad de señalar qué bienes no constituyen prenda general de garantía del Estado frente a sus acreedores y por lo tanto son inembargables en las controversias de orden judicial, pues se trata de una competencia asignada directamente por el Constituyente (art. 63 CP).

No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha dejado en claro que el principio de inembargabilidad no es absoluto, sino que por el contrario, debe conciliarse con los demás valores, principios y derechos reconocidos en la Carta Política y ha aceptado que se rompa este cuando del cumplimiento de obligaciones laborales reconocidas en sentencia judicial o actos administrativos se trata, y ello por la especial protección que amerita el derecho al trabajo.

Así, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencias de tutela con radicados 39.987 del 18 de septiembre de 2012; 31.274 del 28 de enero de 2013, en la cual citó lo dicho en sentencia 39.697 de 28 de agosto de 2012, tema reiterado en providencias 40.557 de 16 de octubre y 41.239 de 12 de diciembre de 2012; la sentencia radicado 55.327 del 20 de agosto de 2014, las sentencias STL18606-2016 y 5601 del 19 de abril de 2017, donde ha estudiado asuntos de inembargabilidad de cuentas de COLPENSIONES, ha indicado que al ponderar los intereses públicos, con los derechos de los accionantes a los cuales no les ha cancelado una obligación contenida en una sentencia judicial, si bien el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, señala el carácter de inembargables de los recursos de la seguridad

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-546 de 1992, MP. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.

² En este sentido pueden consultarse la línea jurisprudencial anteriormente referida y en particular las Sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, T-1195 de 2004 y C-192 de 2005.

social, ello, lesiona los derechos a la seguridad social, a la vida, al mínimo vital y **"al pago oportuno de la pensión"**.

En la última providencia referida se indicó claramente:

"Incluso, en providencia STL18606-2016 la Sala se ocupó de resolver similares cuestionamientos a los que aquí se analizan, en donde fungió como accionado el mismo Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán y el Banco Davivienda S.A., en tal ocasión se expresó:

En asunto de idénticas condiciones, esta Sala en sentencia 39697 de 28 de agosto de 2012, tema reiterado en providencias 40557 de 16 de octubre y 41239 de 12 de diciembre de 2012, consideró:

(...)

Tal posición ha sido reiterada por este Colegiado, en las sentencias STL10627-2014 y STL4212-2015, en la primera de ellas se precisó:

Debe advertirse que tales reflexiones lucen contradictorias pues, como claramente lo indicó la Colegiatura, el derecho reclamado por vía de ejecución forzada, también es pensional, y por ende, los pagos que de él se deriven, deben gozar de igual grado de importancia y prevalencia que para el resto de jubilados a quienes las accionadas buscan blindar.

Aunado a lo dicho, debe entenderse que la inhibición en el decreto de las cautelas por la loable causa de preservar los dineros destinados al pago de pensiones al grueso de jubilados de nuestro país, a la postre constituye un patrocinio a la indolencia y el desorden administrativo de la entidad, quien por la tesis de inembargabilidad no se ve constreñida a cumplir los mandatos Constitucionales y legales que le han sido impuestos.

*En el contexto que antecede, es factible concluir que la negativa del Juzgado accionado y de las entidades financieras de hacer efectivo el embargo decretado, lesiona gravemente los derechos del peticionario a la seguridad social y al mínimo vital, en tanto hacen ilusorias sus aspiraciones de acceder a la prestación económica que le fue reconocida por vía judicial. Ello, **porque si bien los recursos destinados al pago de pensiones son inembargables, lo cierto es que como en este caso lo que se pretende es precisamente el pago de una prestación económica de tal índole, nos encontramos ante la excepción a la regla general.***

Así pues, en aras de evitar la postergación indefinida del cumplimiento de la sentencia judicial objeto de ejecución, se ordenara a las entidades bancarias, si no lo han hecho, que de forma eficiente y pronta procedan al embargo y secuestro de los dineros que posea Colpensiones en las cuentas bancarias y así se garantice el pago de la prestación reclamada por el ejecutante, lo anterior acorde a lo señalado en el párrafo 3 del artículo 53 de la Constitución Nacional."

Igualmente, el Consejo de Estado, en sentencia de tutela radicado No.11001-03-15-000-2019-04516-01 (AC) del 12 de febrero de 2020, sobre el particular expuso:

"A efectos de resolver el problema jurídico planteado, es importante recordar que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos ha sido morigerado por jurisprudencia constante, consistente y pacífica de la Corte Constitucional en las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, C-539 de 2010 y C-543 de 2013, de las deriva que su aplicación se exceptúa cuando la reclamación involucra:

- (i) La satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral;*
- (ii) El pago de sentencias judiciales y*
- (iii) El pago de títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. Además, advirtió que las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos como educación, salud, agua potable y saneamiento básico³.*

La Corte Constitucional motivó la excepción de inembargabilidad de recursos públicos en caso de que el reclamo estuviera relacionado con el cobro de sentencias judiciales, de la siguiente manera:

*"4.3.- En este panorama, el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los **derechos fundamentales** de cada persona individualmente considerada."*

Se concluye entonces, que la regla relacionada con la imposibilidad de decretar medidas cautelares sobre cuentas inembargables no es absoluta, **cuando un ejecutante pretende el pago de una mesada pensional**, pues tal omisión genera una evidente violación al derecho fundamental al mínimo vital, y en estos eventos sí procede tal medida cautelar, como ocurre en el asunto aquí examinado, pues claramente, como incluso lo señala textualmente la jueza de conocimiento, se libró mandamiento de pago en contra de COLPENSIONES **por la suma de \$26.388.318 por**

³ La Corte afirmó que línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

concepto de mesadas pensionales adeudadas entre el 01 de febrero al 30 de noviembre de 2019, incluyendo la mesada adicional, al concluir que la ejecutada desatendió la orden impuesta por este tribunal en sentencia judicial, luego, es diáfano que la accionante se encuentra inmersa dentro de los parámetros que han establecido las altas cortes para que se acceda a embargar determinadas cuentas de propiedad de la ejecutada, pues se está en presencia de vulneración de derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social, sin que sea posible asemejar este asunto con los analizados por esta Corporación en las providencias que cita la primera instancia para negar la medida, pues en aquellas decisiones se pretendía el pago de saldos correspondientes a intereses moratorios, incrementos y costas procesales.

Sin costas en esta instancia al haber prosperado el recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, **la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, revoca el numeral tercero** del auto del 10 de febrero de 2021, proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito dentro del proceso ejecutivo promovido por **Flor Lucia Saldarriaga López** en contra de **Colpensiones**, en cuanto negó la medida de embargo solicitada sobre la cuenta Bancolombia Nro. 65283208570, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de este proveído, para en su lugar, **ordenar** al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en el evento de no haberse cancelado aún la obligación objeto de ejecución, disponer el decreto de la medida cautelar.

Sin costas en esta instancia al haber prosperado el recurso interpuesto.

A través de la Secretaría de la Sala Laboral de esta Corporación realícense las gestiones tendientes a la devolución del expediente digitalizado al despacho de origen, incluyendo la presente actuación.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados virtuales, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados, (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 92 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 28 de mayo de 2021

Secretario